

INTERLUDIO 9. VOTO Y CICLO ECONÓMICO

MARIANO SÁNCHEZ TALANQUER

La evolución del sistema de representación, del comportamiento electoral y del régimen político mismo es inseparable de las transformaciones en la esfera económica registradas en el país en los últimos tres decenios. A grandes rasgos, observamos un proceso de democratización, intensificación de la competencia electoral y ampliación de las libertades políticas que se desenvuelven en un contexto de profundo cambio en el modelo económico, exposición creciente a las fuerzas del mercado, estancamiento y crisis frecuentes. La configuración de este nuevo orden económico y social se manifiesta con fuerza en las elecciones y en el emergente sistema de partidos, que se convierte en un cauce institucional para los intereses y demandas que lo acompañan. La cuestión económica ofrece, pues, claves fundamentales para comprender los grandes patrones de votación y la nueva realidad política de México.

El boom petrolero de fines de los años setenta dio oxígeno temporal a un régimen autoritario que se enfrentaba ya, desde el fin del decenio anterior, con tensiones sociales y problemas económicos crecientes. Entre 1977 y 1981, los ingresos petroleros *per capita* crecen aproximadamente 250%, y junto con la acumulación de deuda, financian la expansión del Estado y el gasto social dirigido a contener el creciente descontento en una sociedad más compleja, urbanizada, informada y diversa. Para 1982, sin embargo, el modelo de desarrollo proteccionista enfrenta su crisis definitiva. Con ello comienza la fractura irreversible del sistema posrevolucionario, que se había construido sobre la base de alianzas sociales, relaciones corporativas y mecanismos de redistribución adheridos a ese modelo. La economía política del PRI, basada en los acuerdos multclasistas bajo la matriz estatista-proteccionista, se derrumba.

Gracias a su control corporativo y forzado por la crisis, el PRI impone reformas a sus bases sociales tradicionales en los sindicatos, las industrias protegidas, el sector agrario. No obstante, incapaz de mantener el crecimiento, el flujo de recursos y beneficios y los pactos sociales sobre los que descansaba su hegemonía, pierde progresivamente cohesión y respaldos. Entre 1982 y 1988, el cambio promedio anual del PIB *per capita* es negativo, de aproximadamente -2%, con fuertes contracciones en 1983 y 1986; entre 1988 y 1994, se recupera marginalmente, sólo para caer abruptamente -alrededor de 8 puntos porcentuales- en 1995. En 1999, el PIB por persona se encuentra tan sólo 4% por arriba de su nivel en 1981, previo a la crisis de la deuda, y el salario mínimo real ha caído en 68%. El apoyo electoral del PRI en el periodo se erosiona de manera consistente: de 71% en las elecciones presidenciales de 1982 a 50% en 1988 (de acuerdo con cifras oficiales), 48.7% en 1994, y 36.1% en la derrota del 2000.

Las políticas de estabilización y ajuste estructural tras la crisis de la deuda inauguran un régimen de acumulación basado en el mercado y la ortodoxia macroeconómica, que se profundiza en los años noventa con las privatizaciones y la liberali-

zación comercial y financiera, se afianza en el decenio de los dos mil, y se mantiene hasta hoy. Como en el resto de América Latina, la transición al nuevo modelo, en un contexto de crisis prolongada y fuertes constreñimientos internacionales, marca un cambio radical en la economía política del país.

Más que una simple adaptación de políticas, la transición redefine el papel y el carácter del Estado, los patrones de asociación y organización en la sociedad civil, las alianzas sociales del poder estatal y las formas en las que las demandas e intereses sociales eran integradas y representadas en la arena política. En otros términos, altera los fundamentos estructurales del sistema político y de los mecanismos de representación. Así pues, se trata, en perspectiva histórica, de una auténtica coyuntura crítica, pues configura una nueva lógica social y política para los siguientes decenios: produce nuevas estructuras, necesidades y demandas sociales; nuevas lealtades políticas; nuevas formas de vinculación Estado-sociedad; nuevos ejes y patrones de competencia electoral.

Entre otros efectos, el cambio en el modelo económico produce un realineamiento electoral mayor y da forma al sistema de partidos contemporáneo. El giro a la derecha del PRI conduce a la traumática fractura de 1988 y la formación de un nuevo partido, el PRD, que aglutina a la izquierda. Emerge así un nuevo eje de competencia política alrededor del papel económico y social del Estado. Tras varios años de austeridad, crisis y políticas de mercado sin precedentes en el régimen posrevolucionario, la nueva alternativa arrebató al PRI alrededor de una tercera parte de los votos.

El apoyo del partido hegemónico se resquebraja también entre las clases medias y empresariales que habían crecido por fuera de su aparato corporativo y clientelar. Éstas fortalecen al Partido Acción Nacional, que si bien coincide en lo fundamental con la nueva orientación de la política económica y social, moviliza apoyos con base en su vocación democrática y su imagen de partido honesto y anticorporativo. Así, desde 1988 elección tras elección tres polos partidistas se reparten el electorado nacional.

También desde entonces, la izquierda partidista canaliza en las elecciones el descontento de varios segmentos sociales con las políticas de mercado. El PRD y sus nuevas derivaciones dan expresión a los principios redistributivos, nacionalistas y estatistas abandonados por el PRI. Un vistazo comparativo a América Latina permite comprender que en el largo plazo, ello ha estabilizado al sistema de partidos en su conjunto. En efecto, cuando otros partidos centristas-populistas abandonaron sus posiciones históricas durante la transición al modelo de mercado, como lo hizo el PRI, sin que una opción a la izquierda encauzara institucionalmente la oposición al modelo, el sistema representativo experimentó crisis profundas en el periodo posajuste. Éstas incluyeron patrones disruptivos de protesta social, colapso de los sistemas de partidos tradicionales y surgimiento de nuevos movimientos y líderes populistas en la izquierda. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

No obstante, es el PAN, con su ímpetu democrático, quien derrota por primera vez al PRI en las presidenciales de 2000 y consigue la reelección en 2006. Se materializa así un decenio de continuidad en el modelo económico, ahora ya en un contexto plenamente democrático. Después de los ajustes de los años ochenta y noventa, se mantiene la disciplina fiscal y monetaria y la inflación permanece en

mínimos históricos. Sin embargo, el estancamiento, la vulnerabilidad a las fluctuaciones internacionales y los déficit sociales siguen siendo la norma.

Desde el inicio de la transición al modelo de mercado, la competencia electoral sucede en un entorno de precariedad económica, crecimiento del subempleo y empleo informal y erosión de los derechos laborales. El porcentaje de trabajadores asalariados con contrato se reduce de 58% en 1989 a 51% en 2000 y a 45% en 2010;¹ el de trabajadores en condición de informalidad, sin prestaciones de ley y excluidos de la regulación, alcanza 60% en 2012.² Pese a que los gobiernos panistas se benefician de un pronunciado aumento en los precios internacionales del petróleo, el crecimiento económico *per capita* en el decenio de los dos mil es de apenas 0.6% anual. La profunda caída en el producto interno tras la crisis global de 2008, superior a 7% en términos reales, vuelve a mostrar la vulnerabilidad de la economía mexicana a los shocks internacionales.

La izquierda se fortalece electoralmente en las elecciones de 2006 y 2012 con campañas que cuestionan aspectos básicos del modelo económico, terminando en segundo sitio en ambas instancias. De este modo, la orientación económica y social del Estado se consolida entre las principales dimensiones programáticas que ordenan la competencia y el sistema de partidos. No obstante, México no se une a la marcada tendencia latinoamericana de intensificación de la movilización social y elección y reelección de alternativas de izquierda en la era posajuste. El PAN se reelige en 2006 y en 2012 es el PRI quien capitaliza su desgaste en el gobierno.

En paralelo a las reformas de mercado, el flujo migratorio hacia Estado Unidos y el envío de remesas han contribuido a disminuir la presión social pese al mediocre desempeño económico. Además, tanto el PRI como el PAN han adoptado estrategias para movilizar apoyo entre sectores sociales excluidos bajo el modelo de mercado. En los últimos tres decenios, el país ha vivido una acelerada transformación en el enfoque y los mecanismos de protección social. Al mismo tiempo que la expansión de la informalidad erosionaba el sistema de seguridad social bismarckiano, basado en el empleo formal y las contribuciones tripartitas (empleadores, Estado y trabajadores), comenzaron a implementarse políticas sociales de asistencia mínima, enfocadas y no contributivas. En efecto, la viabilidad política de las reformas económicas, del modelo de mercado mismo, se construye durante los últimos años del régimen autoritario con nuevas transferencias sociales, desvinculadas de las organizaciones corporativas e instituciones de bienestar que canalizaban el gasto social bajo el modelo proteccionista.

Los gobiernos panistas, por su parte, profundizaron la edificación de este esquema de protección social alternativo, de corte liberal y más compatible con el modelo de mercado por su enfoque individualista, su menor costo (léase menores beneficios) y su enfoque sobre la inmensa fuerza laboral informal, en expansión desde los años ochenta. En el nuevo modelo se incluyen los programas de atención a la pobreza, los apoyos directos a los adultos mayores sin pensión, el seguro médico

¹ Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean (CEDLAS y Banco Mundial). Estadísticas de empleo.

² INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores de informalidad laboral.

para las personas no derechohabientes de las instituciones de seguridad social tradicionales, entre otros.

Este rudimentario sistema de protección social es claramente insuficiente como respaldo de los derechos o vehículo para garantizar una vida digna; los beneficios son mínimos, y a menudo la cobertura poco más que simbólica. No obstante, ofrece en el contexto ventajas importantes. Por un lado, permite al Estado difundir una supuesta función social amplísima, que llega a millones de mexicanos, sin abandonar los dictados de la austeridad ni confrontar intereses resistentes a una mayor carga fiscal, lo cual sería indispensable para un genuino sistema de bienestar. Por el otro, las transferencias focalizadas contribuyen a la capacidad de los partidos de contener la oposición al mercado, es decir, de reproducir en las urnas un modelo de desarrollo que incrementó la inseguridad económica, a cambio de resultados magros.

De este modo, el comportamiento electoral ha reflejado las profundas transformaciones económicas y sociales del país en los últimos treinta años. Como resultado, ha tomado forma un sistema de partidos competitivo, equilibrado y atravesado por divisiones programáticas ancladas en dichas transformaciones. El voto se ha consolidado como el instrumento para expresar las demandas y procesar institucionalmente el conflicto, y pese a sus defectos, el sistema partidista ha reflejado visiones alternativas sobre el modelo de desarrollo y el papel económico y social del Estado. Esa representatividad básica lo ha mantenido a flote, pero ¿podrá seguir haciéndolo? A unos dos decenios del fin de la transición, sobra decir que la joven democracia mexicana ha dado sus primeros pasos en un contexto económico desfavorable, y el desencanto con la representación es patente.